

Antofagasta, a veintiocho de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS:

En estos autos Rol 263-2022, que corresponde al **RIT T-457-2020, RUC 2040303176-4** del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, por sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se acogió sin costas la demanda por vulneración de Derechos Fundamentales con ocasión del despido deducida por CLAUDIA ANDREA MENESES OLIVA en contra de la ILUSTRE. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA, declarando que la demandada vulneró el derecho a la salud y a la integridad síquica de la funcionaria con ocasión de su irregular remoción y se le condena al pago de una indemnización, conforme al artículo 489 inciso 8° del Código laboral, por la suma de \$36.314.280, rechazándose en lo demás.

En contra de esta sentencia el abogado Raúl Arán Cortés por la parte demandada, dedujo recurso de nulidad fundado en la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, referida a la infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y en las causales de los literales b) y c) del artículo 478 del Código del Trabajo, las que se invocan en forma subsidiaria.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, en la audiencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, oportunidad en que se escucharon los alegatos de las partes.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda la nulidad de la sentencia, de modo principal, en la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, por errónea aplicación de ley, señalando que la jueza a quo califica de manera errónea la confianza, dándole un tinte aparente de confianza personal y no de confianza estatutaria o administrativa, que es la que revisten los cargos de exclusiva confianza, como el que ostentaba la demandante, y luego de reproducir parte del



fallo atacado, afirma que se infringen los artículos 1, 7, 8, 489 y siguientes del Código del Trabajo.

En cuanto al artículo 1 del Código del Trabajo, dice que la forma de interpretación del juez a quo atenta contra la propia normativa al momento de calificar como vulneración una causal de término de la relación estatutaria, como lo es la remoción de un cargo, y en el caso sub-lite cabe hacer presente, que no se rige por una relación contractual laboral, sino más bien una relación estatutaria de carácter pública. Y conforme a ello, se infringen los artículos 30, 40, 47, 56, 63 letras c) e i) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y artículos 144, letra c), en relación al artículo 147 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, y conforme al artículo 7 de la ley 19.602, que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades N° 18.695, el cargo de Administrador es un cargo de planta de confianza de la administración, y los cargos de exclusiva confianza del alcalde no gozan de estabilidad en el empleo, pues están sujetos a la libre designación y remoción de aquél, por lo que la pérdida de confianza de quien lo ejerza implica que el servidor de que se trata está obligado a abandonarlo, cuestión que se materializa a través de la respectiva remoción.

Cita jurisprudencia, afirmando que a diferencia de lo que señaló la contraria en su demanda, no es aplicable artículo 144 de la Ley N° 18.883, que establece que el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales sería un límite a la potestad de remoción que recae en la máxima autoridad municipal, sin embargo, esta interpretación es del todo errónea, pues dicha normativa si bien efectivamente no se señala la remoción, esto no quiere decir que opere como limitante la facultad del alcalde como jefe superior del servicio de remover del cargo a algún funcionario de su exclusiva confianza, como se señaló.



Indica que el yerro del sentenciador de acuerdo a la normativa citada, recae en el desconocimiento que se tiene respecto de la normativa administrativa, desde que la Ley 18.695 en su artículo 30, señala que de haberse perdido la confianza en el servidor designado para el cargo de Administradora Municipal, cargo que no es de la situación descrita en el artículo 40 de la Ley 18.695, establece que es el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales (contenido en la Ley 18.883) el que regulará la carrera funcionaria y considerará especialmente la cesación de funciones, y por todos es conocido que la Ilustre Municipalidad de Antofagasta es una Corporación de Derecho Público y está sometida en su actuar al ordenamiento jurídico, y entre las normativas aplicables están las citadas.

Refiere que en atención a la naturaleza propia de los cargos de exclusiva confianza, que los funcionarios que los detentan se mantienen en sus puestos sólo mientras cuenten con ella, dependiendo su remoción de la voluntad de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento, dicho de otra manera, el solo acto de remoción trae consigo la pérdida de la confianza, cuestión que no es necesaria fundar y como se explicará en la próxima causal el sentenciador basa su sentencia, siendo que la denuncia no discutió ni atacó dicha situación. En este sentido, la petición de renuncia que se formula a estos funcionarios constituye el ejercicio de una facultad privativa que expresa el propósito del superior de remover al funcionario de su empleo, por estimarse que dicho servidor ha dejado de contar con la confianza requerida para el desempeño del mismo.

Agrega que la letra c) del artículo 63 de la Ley 18.695 dispone que el alcalde tendrá la atribución de nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las normas estatutarias que los rijan; y que el artículo 30 inciso tercero de dicho cuerpo normativo dispuso que "El administrador municipal será el colaborador directo del



alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente del municipio, y en la elaboración y seguimiento del plan anual de acción municipal y ejercerá las atribuciones que señale el reglamento municipal y las que le delegue el alcalde, siempre que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo". Lo anterior, da cuenta de la importancia que existe en el factor confianza para el desempeño de dicho cargo, de manera que malamente podría perseverar en el puesto quien ha dejado de proveer un grado mínimo de confianza, sin embargo, sorprendentemente el sentenciador, hace una interpretación personal de la confianza, basándose en sus considerandos Noveno, Décimo, Undécimo, Decimocuarto y Decimoquinto.

Afirma que la decisión de no aplicar correctamente lo prescrito, respecto de las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere a la Administración, entre los que se mencionaron los artículos 30, 40, 47, 56, 63 letras c) e i) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y artículos 144, letra c), en relación al artículo 147 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, por lo que la sentencia ha incurrido en infracción a todas las normas legales citadas, influyendo aquello en lo dispositivo del fallo, pues de haberse entendido la calidad de funcionaria planta de confianza de la denunciante, se hubiese rechazado la tutela de autos, ya que la misma se acoge en clara infracción a las normas antes citadas.

SEGUNDO: Que en subsidio de la anterior, interpone la causal contemplada en el literal c) del artículo 478 del Código del Trabajo, que establece que "tratándose de las sentencias definitivas, será procedente el recurso de nulidad cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior".

Señala al respecto, que el yerro que sirve de base para sustentar la sentencia, dice relación con el desconocimiento que se tiene respecto de la normativa



administrativa, desde que la Ley 18.695 en su artículo 30, de haberse perdido la confianza en el servidor designado para el cargo de Administradora Municipal, cargo que no es de la situación descrita en el artículo 40 de la Ley 18.695 establece que es el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales (contenido en la Ley 18.883) el que regulará la carrera funcionaria y considerará especialmente la cesación de funciones, y por todos es conocido que la Ilustre Municipalidad de Antofagasta es una Corporación de Derecho Público y está sometida en su actuar al ordenamiento jurídico, y entre las normativas aplicables están las citadas.

Manifiesta que en atención a la naturaleza propia de los cargos de exclusiva confianza, que los funcionarios que los detentan se mantienen en sus puestos sólo mientras cuenten con ella, dependiendo su remoción de la voluntad de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento. En este sentido, la petición de renuncia que se formula a estos funcionarios constituye el ejercicio de una facultad privativa que expresa el propósito del superior de remover al funcionario de su empleo, por estimarse que dicho servidor ha dejado de contar con la confianza requerida para el desempeño del mismo, y tal como se dijo la sola remoción es parte de la pérdida de confianza pues nace la misma por iniciativa de la autoridad y no de otra persona. El artículo 30 ya citado en varias ocasiones, señala: "...será designado por el alcalde Y PODRÁ SER REMOVIDO POR ÉSTE...", y más adelante señala "sin perjuicio que rijan a su respecto, además, las causales de cesación de funciones aplicables al personal municipal".

Reitera los argumentos ya referidos para la causal anterior, afirmando que como se acreditó en el juicio, las medidas que adoptó la demandada al momento de la remoción se encuadraron dentro de las potestades que esta posee y como lo ha señalado tanto la jurisprudencia administrativa como judicial, esta no requiere expresión de causa, y cita jurisprudencia administrativa al respecto.



Concluye señalando que yerra la sentenciadora al calificar las acciones casi como desproporcionadas como asimismo que se no se haya fundado el decreto alcaldicio en la falta de confianza casi como baladí, por no ser materia ni siquiera de este juicio; y que de no haberse incurrido en las transgresiones denunciadas, la sentencia hubiese concluido que la demandada, en el ámbito de su propia realidad, adoptó todas las medidas y ejerció todas las facultades legales que permitieron de forma proporcionada y razonable decretar la remoción de la denunciante, sin embargo el sentenciador parte catalogando una presunción y sanción en razón de una interpretación errónea de la calidad de la denunciante y de los derechos que esta le ampara como así mismo lo que entiende la ley, la jurisprudencia administrativa y judicial respecto de los cargos de confianza, por lo que de no haber incurrido en esta calificación jurídica errónea hubiera derivado en el rechazo de la presente acción de tutela.

TERCERO: Que en subsidio de las anteriores, invoca la causal de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica en relación a lo dispuesto en el artículo 456 del mismo cuerpo legal.

Dice que amén de la omisión del análisis de la prueba rendida en autos, de todos modos se configura, en la especie, la causal que ahora se hace referencia por cuanto las reglas de la sana crítica fueron quebrantadas en la sentencia censurada por esta vía, pues el análisis de las pruebas allegadas al proceso, de la forma como fueron ponderadas, sobre todo lo que dice en relación a la absolución de posiciones no aportada por su parte y por consiguiente apercibida en base a la normativa aplicable, no se pudo contradecir tan abiertamente como se expresó en el considerando Noveno de la sentencia, que reproduce, afirmando que existiría una evidente falta a la lógica en la



apreciación a la prueba, por cuanto el sentenciador no entiende que una razón justificada de la ausencia del absolvente se debió a que a la fecha de la dictación del Decreto Alcaldicio y más aún, a la fecha en la cual se desarrolló la audiencia confesional, don Wilson Díaz no formaba parte de esta entidad edilicia, ni como funcionario, ni como concejal, ni como alcalde de la comuna, tal es así que se solicitó la absolución de dicha manera, es decir, que concurriera a prestar declaración don Wilson Díaz, quien a la fecha ya no pertenecería de ninguna manera a la Ilustre Municipalidad de Antofagasta.

Agrega que también yerra el sentenciador a hacer un símil a la representación del artículo 4 del Código del Trabajo, esto es, al señalar que su parte podía haber comparecido por alguien que detentara la calidad de representante, sin embargo, dice que cabe preguntarnos, quién detenta esa facultad por su representada, donde su representante es elegido por votación popular, y donde el único que podría hacer la veces de alcalde es el administrador o administradora a la fecha de los hechos, cuestión que parece casi graciosa, pues no existía administradora o administrador, pues este cargo lo detentaba la misma denunciante, por lo que siguiendo la lógica del sentenciador, implicaría un error de tipo normativo, ya que no existe persona que pueda hacer las veces de alcalde, salvo su administrador o administradora, los que, ya sea que tomentos la fecha de audiencia era don Wilson Díaz o don Luis Caprioglio, ambos no pertenecen a la IMA y si se toma la fecha de los hechos es don Ignacio Pozo quien detentaba esa calidad, quien efectivamente declaró en juicio.

Manifiesta que por otro lado, nada se dijo respecto de los oficios incorporados y emanados de la Dirección de Control Municipal y de la Dirección de Gestión de Personas, toda vez que estos señalan que efectivamente la remoción no requiere fundamentación, ya que la misma evidencia la falta de confianza, de hecho es más, el oficio de la Dirección de



Control municipal, señala que existe jurisprudencia administrativa que en un caso similar al de la Sra. Meneses la Contraloría entendió que dicha remoción de un administrador que gozaba de licencia médica se ajusta a derecho, atendido que es un cargo de exclusiva confianza.

Dice que en este caso en particular, no resulta plausible determinar que el absolvente al no prestar su declaración se entiende por apercibido en base a la normativa aplicable, aun cuando existió declaración expresa del sentenciador que independiente de no ser parte de la Municipalidad debo concurrir, debe razonarse que ello es contrario a la lógica, al principio de la razón suficiente y a los hechos asentados en el proceso. En efecto, la sentencia no justifica de manera racional el motivo de su conclusión, la que resulta incongruente con los medios de prueba incorporados al juicio, por ende, lo propuesto por el sentenciador no alcanza la certidumbre suficiente y necesaria que dé razonabilidad respecto de aquél punto, al que no poder ser demostrado, es decir, se desconocen suficientes fundamentos en virtud de los cuales dicha proposición se tiene por verdadera. El principio de razón suficiente, infracción que conforme los antecedentes sí resulta patente. De este modo, al haberse quebrantado las normas reguladoras de la prueba, esto es, la valoración de la misma conforme a las reglas de la sana crítica, se llegó a una conclusión errada de entender que la absolución percibida, se debió a razones sin fundamentación por parte de su representada, toda vez que, como ya se explicó, la rusticación se encuentra determinada en lo concluido por el propio sentenciador, sin embargo, su apreciación se encuentra errada, contraviniendo abiertamente sobre todo el principio de la lógica, las máximas de experiencia y los principios científicamente afianzados.

Solicita que se dicte sentencia de reemplazo que rechace la acción de tutela en todas sus partes, declarando que no se vulneró derecho alguno, sino que solo se aplicó la



normativa vigente al régimen estatuario que unía a la denunciante con la demandada.

CUARTO: Que en cuanto a la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de ley, en el sentido en que la funda el recurrente, persigue verificar que la ley haya sido entendida, interpretada y aplicada correctamente al caso concreto, esto es, a los hechos que se han tenido por probados, tal como se han dado por establecidos en la sentencia.

En razón de ello, la impugnación y la subsecuente revisión por parte de este tribunal han de realizarse con estricta sujeción a tales hechos, sin agregar otros y, en particular, sin que pueda prescindirse tampoco de los que fueran determinados en el fallo.

QUINTO: Que en este orden de ideas, quedaron asentados en la sentencia recurrida, en lo que aquí interesa, según se lee de los Considerandos Séptimo y Noveno, los siguientes hechos:

1. Que la demandante Claudia Andrea Meneses Oliva desempeñó las funciones de Administradora Municipal Titular de la Iltre. Municipalidad de Antofagasta, desde el 27 de enero de 2020 y hasta el 17 de agosto de 2020.

2.- Que la demandante fue removida de su cargo por Decreto N° 764/2020 R, de 17 de agosto de 2020, suscrito por el Alcalde Suplente de la Iltre. Municipalidad de Antofagasta, Ignacio Pozo Piña, a partir de esa misma fecha, sin haber expresión clara, específica y explícita en el acto administrativo de la razón que motiva la desvinculación.

3.- Que al momento de dictarse el Decreto antes referido, la demandante se encontraba haciendo uso de licencia médica, con reposo iniciado el 27 de julio de 2020, con duración inicial de treinta días; y el mismo fue extendido, a partir del 26 de agosto de 2020, por otros treinta días.

4.- Que Ignacio Pozo Piña, Alcalde Suplente de la Iltre. Municipalidad de Antofagasta al tiempo de la remoción



de la actora y quien suscribió el respectivo acto administrativo, llamó telefónicamente a la denunciante, durante la vigencia de su primera licencia médica, plenamente consciente que estaba con reposo, para consultarle cuándo finalizaba su licencia y cuándo volvería.

5.- Que de acuerdo al texto explícito del Decreto de remoción, no existe ni una sola mención clara, directa, inmediata y específica donde la autoridad manifieste que la causal de remoción es haber perdido la confianza en la demandante.

6.- La remoción tuvo por causa real la necesidad de solucionar un problema puntual de gestión, ante la ausencia por licencia médica de la Administradora, que se extendería por otro mes, y no se dio por un tema real de pérdida de confianza.

SEXTO: Que conforme con lo anterior, es posible afirmar que el recurrente no ha respetado los límites fácticos contenidos en el fallo, y que la causal invocada le obliga a aceptar, de manera que solo puede concluirse que el sentenciador aplicó correctamente las normas que, según la parte demandada, se infringieron en la dictación de la sentencia, como asimismo, correctamente no hizo aplicación de aquellas disposiciones que según el recurrente se habrían omitido.

En efecto, establecido como lo ha sido en la sentencia, que la actora fue desvinculada mediante un decreto sin fundamentación mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica, y sin haberse invocado la pérdida de confianza que supone el cargo que desempeñaba, la única conclusión posible frente a tales hechos es que en la remoción de su cargo se vulneraron derechos fundamentales de la demandante consagrados en la Constitución Política de la República, en especial se ha afectado su derecho a la salud e integridad física que garantiza el artículo 19 N° 1 de la carta fundamental, como bien lo estableció la sentenciadora a quo.



Por otra parte, habiéndose establecido de manera expresa en la sentencia recurrida que la desvinculación de la actora no fue por pérdida de confianza, carece de todo sustento el fundamento de la causal invocada de modo principal, pues no respeta el sustento fáctico del fallo al invocar la pretendida pérdida de confianza, que por lo demás tampoco se justificaría frente a la vulneración patente de derechos garantizados en la Constitución, los que no pueden ceder ante textos legales de menor jerarquía.

En consecuencia, la causal principal de nulidad que invoca el recurrente, debe necesariamente rechazarse.

SÉPTIMO: Que por las mismas razones que sirven para rechazar el motivo principal de nulidad, debe también rechazarse la causal subsidiaria del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, en cuanto a que sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior, toda vez que conforme a los hechos establecidos por el tribunal a quo en la sentencia recurrida, la demandante no fue removida de su cargo por pérdida de confianza, y al ser esta pretendida circunstancia la que sirve de sustento a la causal de nulidad en estudio, necesariamente debe rechazarse, siendo aplicable aquí lo ya dicho en el motivo anterior de la presente sentencia.

OCTAVO: Que respecto de la última causal de nulidad que se invoca en el presente arbitrio, referida a que la sentencia habría sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, debe tenerse en cuenta que el artículo 456 del Código del Trabajo establece que el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime; y que en general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen



conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

Esta causal de nulidad se produce cuando en la valoración de la prueba efectuada por el sentenciador, se violentan las reglas de la lógica, o las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados.

Se trata en este caso, además, de un vicio formal que exige que la infracción de las reglas de valoración de la prueba sea "manifiesta", esto es, evidente, ostensible, indudable, lo que no permita arribar naturalmente a la configuración de los hechos que se dieron por sentados en la sentencia, y con ello, a la decisión adoptada por el sentenciador en cuanto al litigio puesto en la esfera de su conocimiento.

En el presente caso, la causal invocada no se manifiesta, pues, revisada la sentencia recurrida, se advierte que el juez hace un detallado análisis de la prueba rendida, y razona abundantemente sobre ello, como se aprecia en los considerandos Quinto y siguientes, que el recurrente también reproduce en parte, y en definitiva los hechos establecidos por el juez a quo en la sentencia y sobre los cuales sustenta su decisión, resultan coherentes, sin que se advierta de modo alguno, que el juez haya apreciado incorrectamente la prueba que se le aportó, lo que queda especialmente comprobado del análisis de lo razonado en el apartado B2 del considerando Noveno, en que el magistrado señala: *"B.2. La razón aparente y la subyacente. Aun cuando la razón implícita de la remoción (que defiende la denunciada en una interpretación holística del decreto municipal) sea la pérdida de confianza, lo cierto es que la evidencia no respalda ni siquiera ese fundamento tácito. Destaca en este punto la propia declaración de Ignacio Pozo Piña, actual concejal del Municipio de Antofagasta, quien al 17 de agosto de 2020 era el Alcalde Suplente y firmó el Decreto N° 764/2020 R, que dispuso la remoción de la actora, testigo el cual fue extremadamente insistente en que no tenía ni tiene*



ningún problema con la denunciante, manteniendo una excelente relación con la misma, que no hubo ningún reproche que él pudiera hacer a su labor, que la diferencia de militancia política entre ella y él no le afectaba ni complicaba para el desempeño del cargo y, lo más sorprendente (que se desarrollará en mayor detalle infra), que incluso la llamó mientras estaba con licencia médica para preguntarle cuando se reincorporaría y le hizo presente que incluso sería reintegrada cuando volviera de su licencia. Este testigo es del todo esencial para calificar lo que pasó, por cuanto, primero que todo, era el Alcalde Suplente y fue quien firmó el acto administrativo de desvinculación, "under his command and by his sole will" (parafraseando al duque de MARLBOROUGH) se tomó la decisión de la desvinculación, ¿quién mejor que él (mejor dicho, quién sino él) debía haber perdido la confianza para remover a la denunciante? Pues bien, esta persona expresó en estrados y bajo juramento tener una excelente relación, pasada y presente con la actora, no tener reproche a la forma en que desempeñó su función, haberla llamado mientras estaba con licencia médica para saber cuándo se iba a reincorporar y -cuando supo que licencia se iba a extender- haberle dicho que la reintegraría a labores cuando volviera de su licencia sin perjuicio de requerir nombrar a otro administrador en el ínterin... res ipsa loquitur, nadie que ha perdido la confianza en otro realiza siquiera una sola de las acciones de crédito, respeto y valoración que él hizo con la denunciante, o no la llama por no interesarle si vuelve o no de licencia médica, o no le pregunta cuándo vuelve, ya que es lo que menos quiere, o no le ofrece la posibilidad de reintegrarla cuando vuelva, ya que la quiere lo más lejos posible del servicio; y, por cierto, salvo por ironía o hipocresía (que no se advirtieron o alegaron por la denunciada), no señala que tiene una excelente relación con esa persona ni mucho menos que no tenga algún reproche a la forma en que ejerció su función. Por cierto, no se trata de entender que la pérdida de confianza deba ser exteriorizada



con las reacciones de HITLER respecto de sus generales luego del desastre de Stalingrado, pero al menos se espera un aire parecido al de CHURCHILL cuando hubo de enviar al Duque de WINDSOR a Las Bahamas (donde haría menor daño que volviendo a Buckingham por su ineptitud diplomática en Europa)... Algo de recelo, molestia, incomodidad, disgusto, tedio o hastío ha de haber que nos indique la falta de confianza, más aún si la expresión misma u otro análoga no fue utilizada en parte alguna del decreto en forma explícita y el testigo cuidó de no proferirla en su deposición. Ahora luego, de la misma declaración del testigo se advierte -entre líneas- lo que realmente se puede inferir ocurrió, más bien asociado a la necesidad de solucionar un problema puntual de gestión, ante la ausencia por licencia médica de la Administradora, que se extendería por otro mes, siendo un cargo que no tiene subrogante, lo que hacía que el Alcalde no pudiera delegar labores (salvo por medio del recurso de encomendar funciones, posible pero incómodo y poco práctico, según se desprende de los dichos del testigo Flores), decidiendo la autoridad la remoción no por falta de confianza sino que por una necesidad de gestión puntual y acotada al tiempo de la licencia médica, pero, para mal de la denunciada, manteniendo realmente la confianza en la funcionaria (o, si se prefiere en negativo, no habiéndola perdido) e, incluso, con la difusa oferta de reintegración al término de la licencia. Por otra parte, para refrendar la conclusión factual antes desarrollada, no podemos dejar pasar por alto el hecho que citado a absolver posiciones, legalmente notificado y apercibido, el Sr. Alcalde en ejercicio de la Ilustre. Municipalidad de Antofagasta no compareció ni hizo se presentara persona alguna con facultades para ello, de manera que ha de operar en contra de la denunciada el apercibimiento dispuesto en el art. 454 N° 3 del Código del trabajo, permitiendo presumir como efectivas las alegaciones de la contraria en referencia a los puntos de prueba, en particular, que la remoción no se dio por un tema real de pérdida de confianza. Finalmente,



hacernos cargo de la explicación (pues no alcanza para justificación) que dio el abogado de la Municipalidad, en referencia a que el Sr. Alcalde no compareció por no ser él quien firmó el Decreto de remoción y no tener conocimientos en la materia. Frente esta argumentación recordar, en primer lugar, que una persona citada a absolver debe comparecer, salvo que se dé una especial causal legal que lo exima de esa carga, cosa que ni se alegó ni probó, y -aun en esos casos- la licencia que da el ordenamiento jurídico (vid art. 389 del Código de procedimiento civil) es el lugar donde declarará, pero no una carte blanche para decidir simplemente no comparecer al juicio, de manera que cuando el edil simplemente desobedece el llamamiento a confesar, válidamente citado y apercibido, debe soportar las consecuencias de su decisión (nótese que tampoco la ausencia trató de ser explicada por licencia médica, permiso administrativo o feriado legal, compromiso funcionario ineludible o alguna disculpa intersubjetivamente compartible). De la misma manera, ha de tenerse presente que la argumentación de no haber firmado el decreto de remoción o no saber nada al respecto tampoco son aceptables para legitimar su ausencia, ya que la denunciante pidió y el Tribunal ordenó la presencia de la parte denunciada a absolver posiciones, teniendo el derecho a interrogarlo, en la línea que estimara conveniente (siguiendo las pautas del numeral 4° del art. 454 del Código del trabajo) y de esa manera obtener alguna información que pudiera reforzar su teoría del caso, todo de forma de hacer efectivo el debido proceso, en su aspecto de derecho a ofrecer prueba, presentar la prueba y poder examinar la prueba, garantizado a nivel Constitucional en el art. 19 N° 3 de la Ley Fundamental... al no venir el alcalde, sin justificación legal (en realidad, sin siquiera disculpa legal), cercena ese derecho fundamental, impide a la parte el ejercicio del interrogatorio y obtener información (o trazos de ella) que le vayan permitiendo consolidar su narrativa, más grave aún en un proceso de vulneración de Derechos



Fundamentales, en donde tan difícil es obtener la evidencia y la propia Ley ha establecido por ello un estándar de convicción degradado a la sola presencia de indicios, conforme el art. 493 del Código laboral, de manera que el ejercicio de la absolución era extremadamente importante. Para concluir, hay que considerar que aceptar y validar que alguien no comparezca a absolver posiciones -siendo el Jefe del servicio o detente la calidad patronal del art. 4° del Código laboral- por su exclusiva argumentación que no sabe, por temas temporales u otros formales, detalles del suceso sub iudice es inaceptable, ya que le auto otorga una "inmunidad" que ni el propio ordenamiento jurídico confiere, siendo que lo correcto es que la persona tenga la responsabilidad y deferencia procesal de concurrir, soportar el interrogatorio y responder honestamente las preguntas y, si no sabe o no recuerda, responder conforme a la ignorancia o el olvido, lo que será valorado por el Tribunal conforme la pauta del art. 454 N° 3 inc. 1° del Código del ramo, pero no auto atribuirse el ilícito privilegio -como una especie de ciudadano por sobre la Ley- de no ir por estimar él, por sí y ante sí, bajo su real saber y entender, que nada útil pueda aportar. Por todo lo dicho, como ya se adelantó, ha de operar el apercibimiento de la ficta confessio, presumiendo como efectivas (y, por cierto, unidas a las evidencias positivas antes referidas) que la remoción de la denunciante no se dio realmente por pérdida de confianza, que esa nunca fue la motivación real y que lo ocurrido fue un tema de gestión interna, donde -por el tiempo que se extendía la segunda licencia de la actora- se buscó nombrar a otro administrador, pero existiendo la "oferta" de reintegrar a la demandante una vez concluida su licencia médica".

Como se ve, en nada se aparta el sentenciador del análisis lógico que supone el empleo de las reglas de la sana crítica; por lo que la causal de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, planteada de modo subsidiario, también debe rechazarse.



NOVENO: Que de este modo, no existiendo otros antecedentes que ponderar o someter a un análisis jurídico, el presente arbitrio de nulidad no podrá prosperar, de acuerdo a los ratiocinios expuestos precedentemente.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 477 y siguientes del Código del Trabajo, **SE RECHAZA, con costas,** el recurso de nulidad interpuesto por el Abogado Raúl Enrique Arán Cortés por la parte demandada Ilustre Municipalidad de Antofagasta, en contra de la sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dictada en causa RIT T-457-2020, RUC 2040303176-4 por el juez Juan Pablo Flores Menéndez del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, la que en consecuencia, no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Ro1 263-2022 (LAB)

Redacción del Ministro Titular Sr. Eric Darío Sepúlveda Casanova.





BNEXCZBLGX

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Oscar Clavería G., Juan Opazo L., Eric Dario Sepulveda C. Antofagasta, veintiocho de octubre de dos mil veintidós.

En Antofagasta, a veintiocho de octubre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

